

C.A. de Santiago

Santiago, treinta de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos RUC 1810029198-K, RIT 76-2022, el Ministerio Público recurrió de nulidad, en contra de la sentencia de fecha 7 de noviembre de 2022, del Quinto Juzgado del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por medio de la cual se absolvió a los acusados **Felipe Ignacio Medel Gajardo**, Teniente de Carabineros, y **Alex Esteban Navarro Urrea**, Cabo Primero de Carabineros, de los cargos contenidos en la acusación fiscal, que les imputa el delito de apremios ilegítimos, en contra de **Matías Inalef Paredes**.

SEGUNDO: Que concedido el recurso y elevados los autos para el conocimiento de esta Corte, con fecha diez de enero de dos mil veintitrés, se procedió a la vista de la causa, oportunidad en la que alegaron tanto el abogado del Ministerio Público don Juan Barros, como el abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos (en adelante INDH) don Daniel Morales.

Asimismo, en representación del funcionario de Carabineros Alex Navarro, alegó el abogado don Camilo Cereño, y por el Carabinero Felipe Medel, alegó el abogado don Cristián Martínez.

TERCERO: Que, el Ministerio Público funda su impugnación en la causal del artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, por cuanto en el pronunciamiento de la sentencia de hizo una errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, siendo las normas infringidas los artículos 10 N°10 y 150 D, ambos del Código Penal. Esta errada aplicación de la citada norma del Código Procesal Penal la sustenta en que el tribunal *a quo*, al

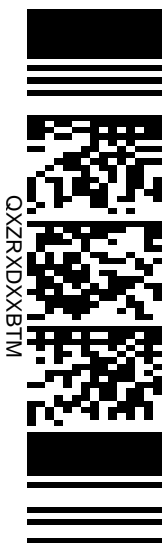


dictar sentencia absolutoria, interpretó y aplicó de forma errada el derecho, la que se verifica en el Considerando Quinto de la sentencia impugnada, al estimar, los sentenciadores de mayoría, concurrente la eximente de responsabilidad penal establecida en el artículo 10 N° 10 del Código Penal y no aplicar el tipo penal del artículo 150 D del Código Penal.

Señala que el sentenciador aplicó erróneamente el artículo 10 N°10 del Código Penal, que establece que están exentos de responsabilidad penal: *“El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo”*.

Concluye que existe una aplicación errónea de los citados artículos del Código Penal, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que el tribunal, por mayoría, dictó sentencia absolutoria, en circunstancias que de haberse aplicado correctamente las normas referidas, necesariamente debió dictarse sentencia condenatoria, por el delito de apremios ilegítimos.

Como petición concreta el recurrente solicita que se acoja la causal de nulidad que se invoca, por haber incurrido el Quinto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, en un error de derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, invalidando el juicio oral y la sentencia pronunciada con fecha 7 de noviembre de 2022, y por la cual se absolvió a los acusados de los cargos contenidos en la acusación fiscal, que les imputaban la autoría del delito de apremios ilegítimos, y ordene la remisión de los autos al Tribunal no inhabilitado que corresponda, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral.



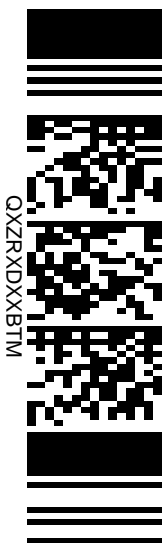
CUARTO: Por su parte, el querellante en esta causa, el INDH también recurre de nulidad en contra de dicha sentencia, con el objeto que esta Corte acoja el recurso, anulando la sentencia y dicte sentencia de reemplazo, en la cual se condene a los acusados como autores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, imponiéndoles las penas previstas en la ley.

Este recurrente también invoca la misma causal, es decir, la contenida en el artículo 373 letra b) del Código Penal, en relación con los artículos 10 N°10 y 150 D, ambos del Código Penal.

La petición concreta efectuada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, consiste en que solicita que se acoja a tramitación el presente recurso de nulidad, elevando los antecedentes para ante el conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; y que se acojan los argumentos entregados para fundar el presente recurso, estableciendo que de conformidad al artículo 385 del Código Procesal Penal, se anule la sentencia y se dicte sentencia de reemplazo, en la cual se condene a los acusados como autores del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, imponiéndose las penas previstas por la ley.

QUINTO: Que por economía procesal y por tratarse de recursos similares, se analizarán de manera conjunta, ya que la causal en la que se apoyan ambos recurrentes es la de nulidad absoluta contenida en el literal b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en los artículos 10 N°10 y 150 D del Código Penal.

Que es pertinente citar la norma que se dice que fue interpretada en forma errónea; en efecto, el artículo 373 del Código



Procesal Penal establece como causal del recurso de nulidad: “b) *Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo*”.

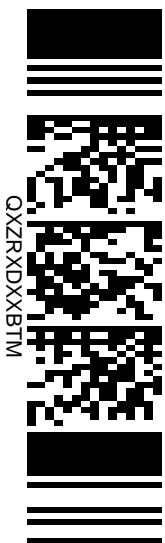
SEXTO: Que ambos recurrentes de nulidad discurren que estaría mal aplicada la eximente de responsabilidad penal establecida en el artículo 10 N°10 del Código Penal, que establece que están exentos de responsabilidad criminal “*El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo*”.

Además, sostienen que se equivoca el sentenciador al no aplicar el tipo penal que establece el artículo 150 D del mismo cuerpo legal, que señala:

“El empleado público que, abusando de su cargo o sus funciones, aplicare, ordenare o consintiere en que se apliquen apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que no alcancen a constituir tortura, será castigado con las penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y la accesoria correspondiente.

Igual sanción se impondrá al empleado público que, conociendo de la ocurrencia de estas conductas, no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de los apremios o de los otros tratos, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo.

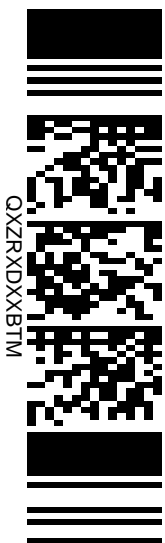
Si la conducta descrita en el inciso precedente se cometiere en contra de una persona menor de edad o en situación de vulnerabilidad por discapacidad, enfermedad o vejez; o en contra de una persona que se encuentre bajo el cuidado, custodia o control del empleado público, la pena se aumentará en un grado.



No se considerarán como apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de sanciones legales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, si los hechos constituyeren algún delito o delitos de mayor gravedad, se estará a la pena señalada para ellos”.

SÉPTIMO: Que sustentan los recurrentes de nulidad penal, que no resulta aplicable a este caso la circunstancia eximente descrita en el artículo 10 N°10 del Código Penal, pues la norma contempla dos hipótesis diversas: 1) *el cumplimiento de un deber* y 2) *el ejercicio legítimo de una autoridad, oficio o cargo*. Se agrega, que el tribunal, en el considerando Quinto se limita a declarar en términos genéricos que concurriría esta eximente de responsabilidad, señalando que los imputados habrían obrado en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin desarrollar los requisitos de dicha eximente ni aclarar la hipótesis aplicable al caso. Agregan que este deber se habría ejercido en forma abusiva, no procediendo aplicar la eximente señalada, ya que al momento en que el imputado Medel le diera un golpe de pie en las nalgas a la víctima, Navarro lo golpea con su bastón retráctil, encontrándose con su rodilla en el suelo e inmovilizado, al menos parcialmente, y que estas acciones por parte de los dos funcionarios de Carabineros constituye una revancha o venganza por la golpiza, que previamente Matías Inalef había propinado a otros funcionarios policiales. El INDH añade que la conducta desplegada por los

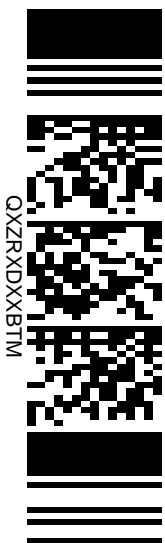


funcionarios de Carabineros sí es lesiva y constitutiva del delito de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

OCTAVO: Que para determinar si el actuar de los dos funcionarios policiales es antijurídica, es necesario situarnos en las circunstancias y contexto en que ocurrieron los hechos.

Tal como lo consigna el considerando Tercero de la sentencia de 7 de noviembre de 2022, se tuvieron por acreditados con la prueba rendida en juicio, los siguientes presupuestos fácticos:

“El día 19 de Noviembre de 2017, a eso de las 07.50 horas aproximadamente y en circunstancias que el funcionario de Carabineros de Chile Alex Esteban Navarro Urra en compañía de Felipe Rosemberg Arancibia, entonces jefe de la 52° Comisaria Rinconada de Maipú, ingresaron a pie al pasaje Soldado Trujillo de la comuna de Maipú, donde observaron cómo una persona, en aparente estado de ebriedad, estacionaba un automóvil y lo hacía parcialmente sobre la vereda y muy cerca de un grifo, ingresando luego al domicilio ubicado en el número 2315 de la referida arteria, evitando ser fiscalizado por Carabineros, por lo que Rosemberg procede a llamar una grúa para retirar el vehículo mal estacionado, lo que motivó que varias personas adultas salieran sorpresivamente de la casa y se abalanzaran sobre el entonces Capitán Rosemberg, a quien empujan al suelo, donde al menos tres personas le propinan reiterados golpes de pie y puño. El cabo Navarro interviene para tratar de poner término a esta agresión, mientras esperaba la llegada de los refuerzos que, urgentemente habían pedido por radio. A los pocos minutos llegó al lugar a prestar colaboración policial una patrulla de la Sección de Investigaciones Policiales de la misma comisaría, a cargo



del entonces SubTeniente de Carabineros Felipe Medel Gajardo quien, en conjunto con Alex Navarro Urra y el funcionario de la SIP Juan Riquelme Cartagena logran poner fin al acometimiento de que era víctima Felipe Rosemberg, procediéndose luego por el personal policial a tratar de aprehender a las personas que habían participado en la golpiza (incluyendo

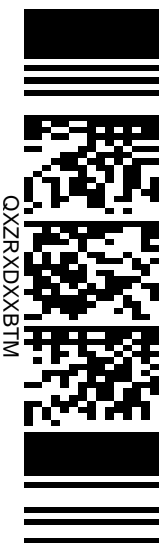
también, al chofer que había sido visto conduciendo aparentemente en estado de ebriedad, que era una de las personas que había participado activamente en la agresión), proceso durante el cual, otra de las personas que había golpeado momentos antes a Rosemberg, esto es, Matías Inalef Paredes, procede a agredir con un elemento contundente, a los carabineros Navarro y Riquelme Cartagena, tratando los funcionarios Medel, Navarro y Riquelme, de detener a Inalef en las inmediaciones, a lo cual éste se resistió, proceso durante el cual Medel procede a darle a Inalef una patada en las nalgas y, el carabinero Navarro lo golpea en dos ocasiones en la espalda con la empuñadura de su bastón retráctil de servicio, lográndose finalmente su detención”.

Que el considerando Cuarto consigna toda la prueba rendida en juicio, la cual fue debidamente analizada y ponderada por el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal. La prueba consistió en declaración de testigos, documentos y pericias, la que fue digna de crédito para los sentenciadores. Tanto la prueba documental como la pericia no fueron objetadas por ninguno de los intervinientes, según se manifiesta en la página 43 del considerando Cuarto de la sentencia.



Cabe tener presente que en este juicio declaró como testigo el chófer de un taxi que se encontraba en las proximidades del lugar. Se trata del taxista Juan Vicente Moreno Ortega, tercero imparcial y no comprometido con ninguna de las partes, presencié a escasos metros los acontecimientos, mientras esperaba a un pasajero que debía trasladarse al aeropuerto, quien manifestó lo siguiente: *"...que el día de los hechos fue testigo de una conducta inadecuada de unas personas que le pegaron a dos carabineros. Él estaba en el domicilio en que fue el altercado. Trabajaba en empresa Transvip y trasladaba pasajeros al aeropuerto, era un domingo, día de las elecciones en Rinconada Maipú y esperaba un pasajero y en eso, lo fiscalizan dos carabineros y cuando hablaba con los dos carabineros, ellos le decían que tuviera cuidado porque era peligroso el sector y en eso, delante de él se para un vehículo y se baja un tipo con 80% de grado de alcohol y quedó mal estacionado entre la cuneta y la calle y carabineros se acercó a él. No recuerda el color del auto. Carabineros se acerca a esta persona a pedirle documentos y bruscamente tiró golpes a los carabineros que le pedían los documentos, era un tipo grande que se había bajado del auto y abría la puerta de su casa y carabineros lo quiso detener, pero igual entró y los carabineros quedaron afuera y en menos de un minuto salen como cinco tipos de la casa y atacaron*

a los carabineros, les pegaron, los golpearon, los patearon. No recuerda la cantidad, pero eran bastantes y un carabinero pide auxilio por radio y en una camioneta llegan carabineros de civiles y los carabineros entraron en la casa porque los tipos no querían salir y así los lograron detener. Los pobres carabineros quedaron como membrillo, todo machucados (SIC), él estaba como a 5 metros

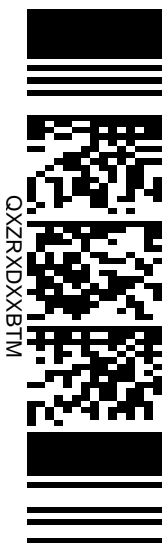


porque en la casa de al lado estaba el pasajero que él esperaba. El tipo más grande no lo podían sacar porque era inmenso y no lo podían sacar de adentro. El pasajero se demoró harto en salir, él siempre llegaba con anticipación para evitar problemas, llegó como una hora antes para llevar al caballero al aeropuerto”.

Por otra parte, es preciso advertir que el tribunal *a quo* tuvo a la vista un video de los hechos, consignando en la página 47 del considerando Cuarto lo siguiente: “No obstante, lo que se aprecia en el propio video de la detención que sirve de base a la prueba de los acusadores es algo muy distinto, pues las imágenes muestran a una persona que se resistía tenazmente a ser detenida, que aunque en un momento parece estar de rodillas rodeada por dos o tres funcionarios que buscaban aprehenderlo, se pone de pie y en ningún momento accede a ser detenida, estado de cosas que sólo culmina cuando un funcionario policial lo hace caer al suelo, donde ocupa el peso de su cuerpo para inmovilizarlo y permitir que fuera esposado”.

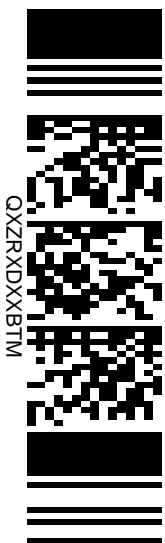
NOVENO: Que, con respecto a la petición de nulidad solicitada tanto del juicio oral como de la sentencia, por la causal del artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en los artículos 10 N°10 y 150 D del Código Penal, esta Corte ha podido observar que se han dado los presupuestos para que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal aplicara correctamente la eximente de responsabilidad penal del artículo 10 N°10 y determinara no aplicar el tipo penal del artículo 150 D, del citado Código Sancionatorio.

La eximente de responsabilidad aplicada no es errónea o equivocada, ya que los funcionarios de Carabineros inculpados



obraron en cumplimiento de un deber y en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. En efecto, Carabineros tiene como finalidad garantizar, controlar y mantener el orden público. En el caso de autos, los funcionarios imputados actuaron en cumplimiento de su deber, fiscalizando a un conductor que manejaba su vehículo en estado de ebriedad (1,16 grs. por mil de alcohol en la sangre) y que estacionó dicho vehículo al lado de un grifo. El conductor de dicho vehículo el señor Rolando Inalef no se dejó controlar por los policías, siendo atacados por la familia de éste, entre ellos el señor Matías Inalef, quien atacó violenta y brutalmente a dichos funcionarios como se consignó latamente en la sentencia. Ellos haciendo uso de la autoridad por el cargo que detentan, procedieron a efectuar la detención de Matías Inalef, quien opuso tenaz resistencia. Dado que Matías Inalef se negó a ser detenido y no siendo voluntaria se aprehensión, la autoridad policial, en cumplimiento de su deber, tuvo que hacer uso de la fuerza legítima de que está investido para lograr vencer esa resistencia indebida. Y así lo manifiesta el considerando quinto en la página 55 de la sentencia.

Resulta necesario enfatizar que Carabineros está autorizado para hacer uso de la fuerza, cuando sea estrictamente necesaria y en la proporción requerida para el desempeño de sus funciones policiales. Asimismo, cabe señalar, que a la época que ocurrieron los hechos, Carabineros estaba sujeto a la Circular N°1756, de 13 de marzo de 2013, que regula el uso de la fuerza, consigna como principios de la reacción defensiva policial los de uso de la fuerza, estricta necesidad, proporcionalidad, uso de armas de fuego como último recurso en caso de peligro inminente para el carabinero. Dicha circular hace una clasificación del uso de la fuerza, diferenciándola en



5 niveles, según el grado de cooperación del fiscalizado con el actuar policial, y los funcionarios policiales actuaron según dicha circular.

En consecuencia, de acuerdo a lo razonado precedentemente, y los fundamentos del fallo recurrido de nulidad, especialmente los contenidos en el motivo Quinto, son compartidos por esta Corte, por ende, no corresponde aplicar el artículo 150 D del Código Penal, por estimar que no ha habido apremios ilegítimos, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco pueden ser considerados como apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes las molestias o penalidades que sean consecuencia de sanciones penales, o que sean inherentes o incidentales a éstas, ni las derivadas de un acto legítimo de autoridad, ya que el querellante de autos no cooperó con los funcionarios policiales para que efectuaran su detención, poniéndose voluntariamente en situación de oposición a dicha acción, actuando en forma violenta, resultando en una agresión a dichos funcionarios.

Que de un examen cuidadoso de cómo ocurrieron los hechos, se puede concluir que éstos no se pueden dividir en etapas para llegar a la conclusión que la actuación de los funcionarios policiales acusados es antijurídica y caer en la hipótesis del artículo 150 D del Código Penal, ya que los hechos fueron una continuidad de sucesos, que ocurrieron en forma muy rápida y dinámica, que hay que considerarlos como una unidad, por lo que sería arbitrario separar los hechos en parcialidades, para poder subsumir dichos hechos en el tipo penal del citado artículo. Y así lo fundamentan los sentenciadores en el considerando Quinto, pagina 51, cuando señalan: *“Esa es la dinámica en la cual se suceden los hechos materia de la acusación y en opinión de estos jurisdicentes, forma una única*



concatenación de sucesos, ocurrida, según dijera el propio Matías Inalef en juicio, de manera muy rápida y en términos que no permiten dividir lo sucedido en etapas diferenciadas porque cualquier separación impresiona como artificial y antojadiza, habida cuenta que la realidad fue dinámica y cuando se trataba de detener a los autores de un delito flagrante, los mismos sujetos incurrieron en nuevos delitos y todo eso ocurrió en un mismo lugar y por parte de las mismas personas de manera continua y si solución de continuidad”.

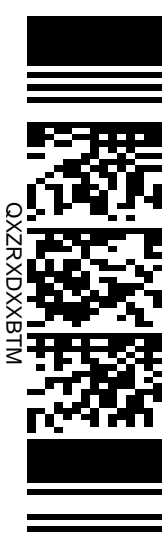
DÉCIMO: Que de acuerdo a lo razonado, se puede concluir que el recurso de nulidad penal será desestimado, ya que la sentencia impugnada no ha infringido el artículo 373, letra b) del Código Procesal Penal, por cuanto los jueces del Tribunal Oral en lo Penal, han hecho una correcta aplicación del artículo 10 N°10 del Código Penal, no siendo procedente aplicar el artículo 150 D de dicho cuerpo legal.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 372 y siguientes del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA**, el recurso de nulidad, deducido por el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en contra en contra de la sentencia dictada por el Quinto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, de fecha 7 de noviembre de 2022, en los antecedentes RUC N° 1810029198-K, RIT N°76-2022, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Claudio G. García Lamas.
N°Penal-5276-2022.





Pronunciado por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Miguel Eduardo Vazquez P., Ministro Suplente Sergio Guillermo Cordova A. y Abogado Integrante Claudio Gonzalo García L. Santiago, treinta de enero de dos mil veintitrés.

En Santiago, a treinta de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

